

POR JORGE SOLEY

# 5 AÑOS DEL PRIMER INTENTO DE IMPEACHMENT A TRUMP



**H**ace ahora un lustro se iniciaba el que fue el primer proceso de destitución, «*impeachment*», del entonces (y ahora) presidente Donald Trump. Se le acusaba de abuso de poder y obstrucción al Congreso y marcaba el inicio de la estrategia de guerra jurídica que el partido Demócrata estadounidense ha llevado a cabo contra Trump. Una estrategia de instrumentalización de la Justicia y acoso judicial para la que se ha acuñado el nuevo anglicismo «*lawfare*».

En realidad, de lo que se trataba era de deshacerse de Trump, un accidente no previsto no sólo por los políticos demócratas en el poder, sino también esa vasta red capilar que maneja la administración, a menudo siguiendo sus propios criterios, en contradicción con el mandato de quien ha sido elegido para gobernar el país. Nos referimos, efectivamente, a eso que se ha dado en llamar «*deep state*» o «*managerial state*».

Pero si esa era la idea de fondo, el *casus belli* dio lugar a aquel *impeachment* fueron las acusaciones de que Trump habría presionado al entonces recién elegido presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para que investigara los turbios negocios de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en Ucrania. Para los demócratas, aquello era una peligrosa persecución contra un inocente ciudadano estadounidense motivada por el ansia de Trump de dañar a su rival; para los republicanos la exigencia, lógica y legítima, de que se aclarasen unas actividades en las que la sospecha de tráfico de influencias era sólida.

Visto en perspectiva, resulta llamativo que los demócratas acusaran, rasgándose las vestiduras, a Trump de presionar al gobierno ucraniano para que actuara de modo que le favoreciera en la campaña de 2020 sacando a la luz supuestos trapos sucios de su rival, cuando luego hicieron exactamente aquello mismo que les parecía tan escandaloso. Nos referimos, claro está, a las confesiones de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, quien no hace mucho confesaba que había cedido ante la presión de la administración Biden para que sus plataformas censuraran ciertos contenidos durante la pandemia de covid-19. O en el caso que nos atañe, lo sucedido con la información que publicó *The New York Post* sobre el ordenador de Hunter Biden, donde se encontraron correos electrónicos que demostraban que sus negocios en el extranjero habían influido en la política exterior de EE.UU. mientras su padre era vicepresidente con Obama. El FBI indicó que aquello era una intoxicación rusa y la noticia fue censurada en redes sociales. Ahora sabemos que aquello no era ningún complot ruso (de hecho, todas las conspiraciones rusas que, según Hillary Clinton, le habrían dado la victoria a Trump en 2016, han resultado ser nada más que bulos sin fundamento) y que una agencia federal presionó con éxito para que se ejerciera una censura injustificable. ¿Recuerdan aquello de ver la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga en el propio?

Para aquel *impeachment*, los demócratas contaron con el apoyo de veteranos funcionarios e incluso de antiguos colaboradores de Trump que, no descubrimos nada nuevo, es capaz de generar adhesiones entusiastas, pero también radicales aversiones. En realidad, la cosa venía de lejos: Nikky Haley denunció en su libro *With All Due Respect* cómo el exsecretario de Estado Rex Tillerson y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly le habían pedido socavar la autoridad de Trump «para salvar el país». Y es que las primeras propuestas para destituir a Trump se iniciaron incluso antes de que éste asumiera el cargo de presidente en enero de 2017, en base a la campaña de intoxicación demócrata conocida como *Russiagate* o trama rusa. Así, los congresistas demócratas Al Green y Brad Sherman propusieron un *impeachment* en 2017 que fracasó por un margen de 58 a 364 votos. Pero los demócratas ganaron el control de la Cámara de representantes en las elecciones de 2018 y, con la mirada puesta en las elecciones de 2020, Nancy Pelosi se lanzó a iniciar el proceso de destitución en 2019. Todo, además, debía de hacerse en audiencia pública, con las declaraciones transmitidas en directo para conseguir un impacto máximo en la opinión pública.

Fueron desfilando numerosos testigos: Marie Yovanovitch, la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, el teniente coronel Alexander Vindman o Gordon Sondland, exembajador ante la Unión Europea, quien declaró que Trump había congelado la entrega de 400 millones de dólares a Ucrania hasta que no se iniciara una investigación con garantías sobre las actividades de Hunter Biden. Los demócratas estaban entusiasmados: el profesor derecho constitucional de la Universidad de Brown, Corey Brettschneider, declaró que «éste es quizás uno de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos». Y la insistencia en el bulo de las interferencias rusas no cesaba: Fiona Hill, ex miembro del Consejo Nacional

de Seguridad, sostenía que Rusia había atacado a Estados Unidos en 2016 y que negarlo era dañino para el país. *The Guardian* tituló su defensa de la teoría de la conspiración de las interferencias rusas al más puro estilo orwelliano: «Fiona Hill rebate la teoría de la conspiración y se erige en heroína de nuestro tiempo».

Finalmente, la Cámara de representantes aprobó el *impeachment* por 230 votos contra 197, con lo que Trump se unió a Andrew Johnson y Bill Clinton en el «club» de presidentes estadounidenses sometidos a este proceso de destitución (en el caso de Richard Nixon el proceso de destitución no se consumó al renunciar antes a la presidencia). Entonces, sospechando que la mayoría republicana en el Senado acabaría por la vía rápida con el proceso, Nancy Pelosi demoró todo lo que pudo el traslado del mismo al Senado, que es donde se debía decidir de manera definitiva. Al mismo tiempo se abrían otros procesos para tumbar, o al menos dejar tocado a Trump. *Lawfare* a todo gas.

El abogado de Trump, Pat Cipollone, afirmó que los demócratas estaban «pidiendo que reviertan, no sólo los resultados de la última elección, sino que retiren al presidente Trump de unas elecciones que tendrán lugar en nueve meses». La votación en el Senado fue favorable a Trump por un margen de 52 a 48 para absolverlo de la primera acusación de abuso de poder y de 53 a 47 para absolverlo de obstrucción al Congreso (se necesitan dos tercios, 67 votos, para destituir a un presidente, algo que no ha ocurrido nunca en la historia). Como curiosidad para la historia, el antiguo candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, se convirtió en el primer senador en la historia de un partido que votó a favor de condenar al presidente de su propio partido. Su argumentación para votar contra Trump también merece un momento de atención: «*un presidente puede cometer actos contra la confianza pública tan atroces que, aunque no sean delitos tipificados por la ley, exigen la destitución*».

Resulta también interesante señalar que todas las encuestas de popularidad han indicado desde entonces que la persecución judicial a la que los demócratas sometieron a Trump no sólo no hizo disminuir sus apoyos, sino que lo reforzaron, al ser visto como la víctima de un complot de gente poderosa y sin escrúpulos. Lo mismo ocurrió con la recaudación: el comité de campaña de Donald Trump recaudó cifras récord coincidiendo con este primer *impeachment*.

Luego llegaron las elecciones de 2020, con su largo y sorpresivo recuento, el segundo *impeachment* contra Donald Trump por incitación a la insurrección, la sentencia por falsificación documental en el caso Stormy Daniels y una larga lista de causas judiciales... que tras la reciente victoria de Donald Trump se han desinflado en tiempo récord. Lo cierto es que los esfuerzos por encarcelar a Trump han contribuido a allanar su camino de vuelta a la Casa Blanca. Ahora podemos decirlo: con la estrategia de utilizar de forma retorcida el sistema legal con fines políticos les ha salido a los demócratas el tiro por la culata.